

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 15° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-20692-2019
CARATULADO : CASTILLO/FISCO CDE

Santiago, catorce de Noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS:

Comparece don Adil Brkovic Almonte, abogado, domiciliado en calle San Pío X, N°2460, oficina 702, mandatario judicial de doña María del Carmen Castillo Echeverría, profesora, domiciliada en calle Simón Bolívar 5978, departamento 101, comuna de La Reina, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado judicialmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, Edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago.

Relata que su representada conoció a Miguel Enríquez a fines del año 1967, en el contexto del trabajo político de los partidos de izquierda de la época y en el segundo semestre de 1969 la amistad política devino en una relación amorosa que incluía a las hijas de ambos. Entre abril de 1971 hasta el otoño de 1973 convivieron en una casa arrendada en la comuna de Las Condes, la que debieron abandonar porque la Marina había conseguido una orden de detención en contra de varios dirigentes del MIR, entre ellos Miguel, y arrendaron una casa en la Gran Avenida, en la calle Zurich Sur. Es así que, el 30 de junio de 1973, al día siguiente del “Tancazo” junto a las niñas, y a otra pareja, se cambiaron a dicha casa hasta principios de diciembre de 1973, luego se mudaron a una casa en la comuna de San Miguel, ubicada en calle Santa Fe N°725, lugar donde llevaban una vida cotidiana con las hijas de cada uno, en especial el día domingo. En mayo de 1974 el ginecólogo le señaló a su representada que se encontraba embarazada, y organizaron un parto con extremas medidas de seguridad con otras mujeres en la misma situación de clandestinidad y cuando la represión los tenía cercados, a mediados de septiembre concretizaron el asilo de sus respectivas hijas en la embajada de Italia y se prepararon para cambiarse a una parcela en La Florida.

Señala que el día 5 de octubre de 1973 la labor de rastreo de la DINA les permitió obtener los datos de la ubicación de la casa de Miguel, desplegándose un operativo gigantesco con participación de integrantes de distintas ramas de las



Fuerzas Armadas, quienes tomaron la casa por asalto, y luego del enfrentamiento fue encontrada su representada por los agentes desangrándose detrás de un librero, donde Miguel la había dejado escondida para protegerla por las heridas que le habían causado las esquirlas de una granada, pérdida de sangre que finalmente habría afectado irremediablemente la vida de su hijo quien fallece luego de un mes de nacido. En cuanto a Miguel, habría sido ejecutado a los minutos de los hechos recién descritos, al tratar de pedir ayuda para su representada, recibiendo 6 impactos de bala.

Indica que el Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para causas de Derechos Humanos, don Mario Carroza Espinosa, estableció en la sentencia definitiva dictada con fecha 29 de diciembre de 2017, en los autos Rol 309-2012, que Miguel Enríquez había sido asesinado de manera premeditada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, y transcribe en parte los fundamentos de dicha sentencia.

En cuanto al daño, señala que para su representada la pérdida del conviviente, con quien compartía un proyecto de vida en común, sumado a la pérdida de su hijo, produjeron un impacto emocional irreparable. El haber sido testigo presencial de la ejecución de su pareja y dar a luz un hijo que murió 30 días después de nacido, como consecuencia directa de la violencia genocida de miembros de las fuerzas armadas, ha provocado un daño a su representada que estudios calificados denominan como trauma con consecuencias psicológicas y psiquiátricas severas, ya que la ejecución política de un familiar representa una experiencia trágica e inédita que actúa sobre las diversas estructuras psíquicas de los individuos afectados provocándoles una constelación sintomática perturbadora e incapacitante, así como cambios profundos en la personalidad y en el curso de su vida.

Sostiene que en el caso se dan todos los supuestos necesarios para que el daño moral sea indemnizado, hay certidumbre de los hechos que impactaron negativamente la esfera psicológica de su representada; pues han sido consecuencia directa e inmediata del ilícito cometido por ex funcionarios del Estado; y se presume acreditada que esté la relación con la víctima.

Finalmente, para mitigar las carencias emocionales del asesinato de la pareja de su representada y de su hijo, estima como indemnización que el Estado debe pagar la suma de \$250.000.000.- todo ello con reajustes, intereses y costas.



Invoca como fundamentos normativos el estatuto que regula la responsabilidad extracontractual del Estado, contenido en los artículos 1º inciso cuarto, 5º, 6º, 7º, 19 N° 2º y 38º de la Constitución Política de la República, y artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado, por expresa disposición del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política, se extiende además a los convenios o tratados internacionales ratificados por Chile, a los principios generales del derecho internacional y al derecho consuetudinario internacional, fuentes del derecho internacional, en atención a que los hechos generadores de la responsabilidad tienen el carácter de crimen de lesa humanidad y cita jurisprudencia nacional relacionada al tema.

Por lo expuesto solicita tener por interpuesta la demanda y en definitiva acogerla en todas sus partes, solicitando se indemnice a su representada con la suma de \$250.000.000.- por el daño moral sufrido por los hechos descritos, más reajustes e intereses a contar de la fecha de la sentencia que lo conceda y hasta el pago efectivo de la indemnización, con costas.

Con fecha 5 de septiembre de 2019 fue notificada la demanda al Fisco de Chile.

Con fecha 26 de septiembre de 2022 el Fisco de Chile, debidamente representado, contesta la demanda en los siguientes términos:

En primer lugar, señala que la indemnización pretendida es improcedente por **preterición legal de la demandante**, ello por cuanto la indemnización solicitada se desenvuelve en el marco de infracciones a Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional tanto en el Derecho Interno como en el Internacional, compensándose algunos daños en desmedro de otros. En este escenario la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares mediante prestaciones en dinero, las que a diciembre de 2015 ascendían a la suma total de \$706.387.596.727.- desembolsada por el Fisco. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, pero para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal que optó por beneficiar únicamente a padres, hijos y cónyuge; pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de otra índole, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les



consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Señala que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso de la demandante, fue preterida por la ley como beneficiaria de una asignación en dinero por el daño que invoca, sin que ello implique afirmar que no haya obtenido una reparación satisfactiva por otra vía.

En segundo lugar, opone la **excepción de reparación satisfactiva** por el secuestro calificado de su pareja, puesto que fue reparada mediante otras prestaciones que vinieron a reparar el daño moral sufrido, pues como daño extra patrimonial su compensación no solo se desenvuelve en el aspecto netamente económico.

En dicho sentido, desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia, así los programas de reparación incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, así las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica.

Como tercera defensa, opone la **excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante en su calidad de víctima** de violaciones a los Derechos Humanos dentro del sistema nacional de reparación del Estado de Chile.

Argumenta que la reparación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos se ha realizado principalmente por medio de tres tipos de compensaciones, a saber: a) transferencias directas de dinero; b) asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, c) reparaciones simbólicas. Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Concluye que de todo lo expresado hasta ahora existe una identidad de causa entre lo que se pide en autos y las reparaciones ya realizadas, los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica, tanto la indemnización solicitada en



estos autos como el cúmulo de reparaciones indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos.

En seguida, opone la **excepción de prescripción extintiva** de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el 2497 del mismo, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes por encontrarse prescrita la acción.

Señala que según el relato efectuado por la actora, la detención ilegal y torturas que sufrió y el asesinato de su pareja ocurrieron el día 5 de octubre de 1974. Así, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia hasta la restauración de la democracia, a la fecha de la notificación de la demanda, esto es, el 5 de septiembre de 2019, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332 del código ya citado.

En subsidio, para el caso de que el Tribunal considere que la norma anterior no resulta aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil en relación al artículo 2514, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la de notificación de la demanda transcurrió con creces dicho plazo.

En dicho contexto, precisa que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Precisa que el fundamento de la prescripción es dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, es una institución estabilizadora y no como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Aclara que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina



el derecho a la indemnización, solo ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción, al respecto expresa que el Pleno de la Excmá. Corte Suprema dictó con fecha de 21 de enero de 2013 una sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y zanjó la controversia en la forma que señala.

Solicita se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis las argumentaciones hechas valer en este punto y la jurisprudencia posterior al citado fallo, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013, que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

De otro lado, señala que la indemnización de perjuicios no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Por ello, la acción destinada a exigirla, como toda acción patrimonial, está expuesta a extinguirse por prescripción.

Precisa que, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia (citando al pie variedad de la misma), en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, y tal proceder no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue.

Finalmente, refiere en cuanto a las alegaciones del actor respecto de la imprescriptibilidad de la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, precisa que ninguno de los instrumentos internacionales que detalla contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno de esta materia.

Así, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia



civil, corresponde aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, sostiene que la **indemnización solicitada es excesiva**.

En cuanto al daño moral sostiene que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio. En dicho sentido, señala que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

De otra parte, señala que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, en consecuencia, el juez habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades, entonces con prescindencia del patrimonio del obligado al pago.

En subsidio, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por la actora conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, de lo contrario implicaría un doble pago por el mismo hecho.

En un último acápite, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los primeros sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca esa obligación y además, desde que dicha sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, pues antes no existe ninguna obligación para su representado de indemnizar suma alguna, en consecuencia, que reajustar.



En lo que toca a los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, señala que de acogerse la demanda, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 9 de octubre de 2019 la demandante evacúa la réplica haciendo presente que en ninguna parte de la demanda expresa como causa de pedir el período de detención ilegal, apremios ilegítimos y torturas que habría sufrido su representada.

Señala que nada de lo afirmado por el Fisco en la primera excepción opuesta es efectivo, bastando con leer los artículos 17 a 20 de la Ley 19.123, para descartar los argumentos expuestos por la demandada, sin perjuicio de la improcedencia de la alegación en este ámbito de responsabilidad extracontractual por daño moral, en que no se está reclamando pensión alguna, lo mismo en cuanto a la excepción satisfactiva fundada en las pensiones otorgadas por la Ley N°19.123 no es ni ha sido beneficiaria de la pensión de reparación que estableció dicha ley ni tampoco de sus beneficios y en cuanto a la Ley 19.992 si bien su representada es beneficiaria de la misma, atendida su condición reconocida voluntariamente por el Estado, como víctima de prisión política y tortura, es evidente que su otorgamiento tiene una causa muy distinta a la causa de pedir de este juicio.

Sostiene que en el ámbito de esta demanda por daño extra patrimonial no hay límites ni orden de prelación para que víctimas “por repercusión” o “por rebote” puedan demandar indemnización de perjuicios en sede civil. La doctrina reconoce que en ausencia de norma limitativa o que establezca prelación, revisten carácter de damnificados indirectos quienes demuestran perjuicio a raíz del fallecimiento de la víctima.

En el ámbito del daño moral por repercusión, el elenco de sujetos activos de la



acción debe atender exclusivamente al principio de que toda persona que demuestra un perjuicio cierto tiene derecho a resarcimiento y no cabe limitar el ejercicio de esta acción a la existencia de un vínculo parental o de familia, en dicho sentido, expresa que la Corte Suprema ha señalado que no es necesario ser heredero o sucesor de la víctima para pedir la reparación del perjuicio (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XXI, Sección 1ª, p. 1053).

En lo que hace la excepción de pago por equivalencia, sostiene que la implementación de programas de reparación no satisfacen por si solos la pretensión

reparatoria de las víctimas, más aún, cuando no se ha expresado, ni en la Ley 19.123, ni en la ley 19.980, el efecto extintivo de los derechos indemnizatorios que podrían tener las personas titulares de estos beneficios, resultando impresentable que el Fisco de Chile pretenda imputarles a los familiares de las víctimas, con cargo a las futuras indemnizaciones que pudiesen llegar a obtener, el gasto en que el Estado ha incurrido en reparaciones simbólicas. Además, no existe norma legal alguna que establezca la incompatibilidad entre estos supuestos beneficios simbólicos, asistenciales o de sobrevivencia.

En cuanto a la excepción de prescripción, sostiene que la prescripción alegada por la demandada le es inoponible, toda vez que las reglas por ella invocadas - artículo 2332, 2497 y 2515, todas del Código Civil- son inaplicables al caso, por tratarse de una responsabilidad regida por disposiciones de Derecho Público, de rango constitucional, artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 38 de la Constitución Política de la República, 4º y 42 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. En efecto, las normas del derecho común que han sido citadas, por la demandada no son aplicables en cuanto los hechos en que se funda la presente demanda son constitutivos de un crimen de lesa humanidad, según ha quedado establecido y firme, por sentencia penal ejecutoriada, Rol 90.431-1999 del 9º Juzgado del Crimen de Santiago .

Con todo, tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es



muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

En cuanto al monto de la indemnización, no comparte que la indemnización demandada sea excesiva, atendido justamente a la extensión del daño, sin perjuicio que este queda sujeto a la prudencia del juez.

Con fecha 4 de noviembre de 2019, el demandado evacúa la réplica reiterando lo las alegaciones, excepciones y defensas expuestas en la contestación.

Con fecha 18 de noviembre de 2019, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 9 de enero de 2023 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, compareció don Adil Brkovic Almonte como mandatario judicial de doña María del Carmen Castillo Echeverría e interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado judicialmente doña María Eugenia Manaud Tapia, todos ya individualizados, a fin de que se declare que el demandado debe pagar a su representada a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido como consecuencia del homicidio calificado de su conviviente, don Miguel Humberto Enríquez Espinosa, ejecutado por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia y por el fallecimiento del hijo de ambos, Miguel Ángel Castillo, como consecuencia indirecta de las heridas recibidas por la demandante de parte de dichos agentes, la suma de \$250.000.000.- más reajustes e intereses, o la suma que el tribunal estime, con costas.

Lo anterior, por los fundamentos de hecho y de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, al contestar la demanda el Fisco de Chile solicita su total rechazo por los argumentos ya reseñados en lo expositivo.



TERCERO: Que, la demandante sustenta su pretensión indemnizatoria en el daño moral sufrido a causa de la ejecución de su pareja y padre de su hijo por el actuar de agentes del Estado de Chile en el ejercicio de sus funciones, como también la muerte del hijo de ambos, a consecuencia de la violencia ejercida por los mismos, especificando las secuelas psicológicas que afirma han permanecido hasta la fecha.

CUARTO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, toca al actor acreditar los supuestos de hecho en que afinsa su acción.

QUINTO: Que, a objeto de acreditar sus asertos, la demandante acompañó la siguiente prueba instrumental, que no fuera materia de objeción contraria:

1.- Copia simple de la sentencia criminal definitiva de primera instancia dictada con fecha 29 de diciembre de 2017, Rol N°309-2012, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, don Mario Carroza Espinosa, que condena a Miguel Krassnoff Martchenko a la pena que señala, como autor del delito de homicidio calificado cometido en contra de Miguel Enríquez Espinosa el 5 de octubre de 1974 y a Teresa Osorio Navarro y Rodolfo Concha Rodríguez como cómplices del mismo.

2. Copia simple de la sentencia de segunda instancia, de fecha 7 de mayo de 2019 dictada en la misma causa, Rol 1015-2018, de la Séptima Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que confirma la sentencia apelada y condena a los acusados Teresa Osorio y Rodolfo Concha como coautores del delito de homicidio calificado y al cumplimiento efectivo de la pena y fallo de la Excma. Corte Suprema de fecha que rechaza los recurso de casación interpuestos en su contra.

3.- Copia de sentencia de 29 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Órdenes Guerra y otros v/s Chile.

4.- Informe psicológico de doña María del Carmen Castillo Echeverría de fecha octubre y noviembre de 2021.

5.- Publicación elaborada por psiquiatra y psicólogos de la “Fundación de



Ayuda Social de las Iglesias Cristianas”, relativa a las consecuencias sobre la salud en familiares de ejecutados políticos.

SEXTO: Que además, a folio 77 la demandante produjo la declaración de los testigos individualizados en la nómina de folio 24, doña Viviana Uribe Tamblay, ingeniero comercial; doña Gladys Díaz Armijo, periodista, y doña Cecilia Jarpa Zúñiga, tecnóloga médica.

SÉPTIMO: Que, el demandado por su parte solicitó a folio 7 se oficiara al Instituto de Previsión Social a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido la actora, especialmente en relación a las Leyes N° 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y las demás pertinentes.

Al efecto, a folio 15 consta informe del Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia Instituto de Previsión Social que detalla los beneficios de reparación de doña Carmen Castillo, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura con opción a pensión no contributiva como exonerada política, señala una pensión de exonerada enero de 2004 a septiembre de 2019 de \$27.262.419, bono Ley N°19.234 de \$2.570.000, bono Ley N°19.992 por \$3.000.000.-; aporte único Ley N°20.874 por \$1.000.000.-; Aguinaldo \$473.202; total pagado \$34.305.621.-, pensión actual \$181.815.-

OCTAVO: Que apreciando la prueba producida en autos en forma legal, ha de tenerse por acreditado, en lo atinente a estos autos, que doña Carmen Castillo Echeverría mantenía una relación de pareja y convivía con Miguel Enríquez Espinosa en el domicilio de calle Santa Fe 725, comuna de San Miguel, a la fecha en que este último es herido y asesinado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, el día 5 de octubre del año 1973, oportunidad en que se encontraba junto a la actora quien estaba embarazada de 6 meses de gestación de su hijo en común y resultó gravemente herida en su brazo y pecho por las esquirlas de una granada, perdiendo gran cantidad de sangre hasta que fuera llevada al Hospital Barros Luco y luego al Hospital Militar donde permaneció incomunicada hasta ser estabilizada y operada.

Con fecha 29 de diciembre de 1974 nació el hijo de la demandante en el Hospital de Cambridge, Inglaterra, quien falleció el 1 de febrero del mismo año, a



causa de bronconeumonía y anoxia cerebral severa probablemente a causa del largo período de hipoxia fetal provocada mientras la demandante estaba embarazada y la ocurrencia de los hechos acontecidos el 5 de octubre de 1973.

Por sentencia fecha 29 de diciembre de 2017, Rol N°309-2012, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, don Mario Carroza Espinosa condenó a Miguel Krassnoff Martchenko como autor del delito de homicidio calificado cometido en contra de Miguel Enríquez Espinosa el 5 de octubre de 1974 y a Teresa Osorio Navarro y Rodolfo Concha Rodríguez como cómplices del mismo, confirmada por la ltima Corte de Apelaciones aumentando algunas penas y fueron rechazados por la Excma. Corte Suprema los recursos de casación interpuestos en su contra

Es posible constatar también que la actora ha sido beneficiaria en distintas capacidades en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, los cuales obedecen a reparaciones a personas exoneradas por motivos políticos y a los titulares individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura.

NOVENO: Que el Fisco de Chile funda en primer término su defensa en que la demandante ha sido preterida por la Ley como beneficiaria de una asignación en dinero por el daño que invoca; en seguida opone las excepciones de reparación satisfactiva e integral, ya que la actora habría sido indemnizada mediante otras prestaciones y beneficios que vinieron a reparar el daño moral sufrido, y por haber sido ya reparada en su calidad de víctima, respectivamente.

DÉCIMO: Que al respecto conviene precisar que el hecho de que el sistema legal de reparación no contemplara a personas con un vínculo diverso de parentesco al señalado por el Fisco, no obsta la interposición de la presente acción de indemnización por el daño moral sufrido ello por cuanto esta no guarda relación con las reparaciones otorgadas por el Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, no es efectiva la preterición legal que arguye el



demandado por cuanto nuestro ordenamiento no ha explicitado mayormente quiénes son damnificados indirectos, por lo que se estima que existe titularidad cuando hay un interés quebrantado por el hecho que causa daño. Es por tal razón que la indemnización del daño moral en el caso de muerte de la víctima puede ser solicitada no sólo por los parientes más cercanos en su calidad de víctimas por repercusión sino que por toda aquella persona que haya sufrido un perjuicio significativo derivado de la misma, demostrando en el caso los especiales lazos que los unían y en consecuencia, demostrar un daño susceptible de ser indemnizado.

En efecto, la doctrina reconoce que en ausencia de norma limitativa o que establezca prelación, revisten carácter de víctimas indirectas quienes demuestran perjuicio a raíz del fallecimiento de la víctima. Para pretender el resarcimiento del daño basta que éste consista en el menoscabo de un interés legítimo, en el sentido de ser digno de protección, esto es, el que se encuentra en la esfera propia de las personas aunque carezca de un medio de protección legal que autorice su obtención compulsiva a través del derecho.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la excepción de reparación satisfactiva, ha de señalarse que si bien el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos a contar del 11 de septiembre de 1973 a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y a través de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, conocida como Comisión Valech y se han establecido mediante diversas Leyes pensiones anuales de reparación, aguinaldos, bonos y otras en un intento de reparar a las víctimas por violaciones a los derechos humanos, como reconocimientos a sus familiares; de ninguna forma aquellas constituyen una indemnización por el daño moral en el caso por el asesinato del conviviente de la demandante y de su hijo, sino que constituyen más bien un beneficio de carácter social, sin considerar los elementos propios y personales de los hechos por los cuales se demanda y en el caso pueden ser considerados en la condición de víctima que además detenta la demandante por los apremios ilegítimos que sufrió personalmente.

Similar razonamiento procede para el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta, toda vez que aquella dice relación con la pensión y beneficios en su calidad personal de víctima de detención apremios ilegítimos y



no ha sido establecida con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado como el pretendido en estos autos, los que sin perjuicio no ha sido expresamente alegado por el demandado ni menos probado.

Por los motivos precedentes es que tampoco procede imputar a la indemnización aquí reclamada, las cantidades que en calidad de beneficiaria de las reparaciones y pensiones haya recibido la actora en calidad de detenida o como exonerada política, por lo que no cabe sino desestimar las excepciones de reparación.

DUODÉCIMO: Que, en seguida corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción alegada por el Fisco en su escrito de contestación.

En primer término, cabe señalar que tratándose de violaciones a los derechos humanos –cual es la calificación que debe darse a los hechos fijados en el motivo séptimo del fallo –el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida en autos por la parte demandante como de índole o naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son configurativos de un delito de lesa humanidad del cual emana.

DÉCIMO CUARTO: Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad a aquel que sirven de fuente u origen a la acción impetrada en la demanda.

La cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y



por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5° de la Constitución Política de la República que, junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”* y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización como la que ha sido reclamada en estos autos.

DÉCIMO QUINTO: Que, el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que le haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5° de la Constitución Política.

DÉCIMO SEXTO: Que, analizando ahora los preceptos invocados por el Fisco de Chile en sustento de su pretensión de rechazo de la demanda indemnizatoria, cabe señalar que no resultan atinentes las reglas de Derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios al encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y otros legítimos titulares.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación sin que esta omisión importe contravenirlos.

No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la



Constitución sino también por los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2497 señala que las reglas de prescripción “*se aplican igualmente a favor y en contra del Estado*”, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto y es por ello que debe darse aplicación a las normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención no remite al Derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez).

DÉCIMO OCTAVO: Que, en el mismo sentido el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según ya se afirmó –que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales –en la especie, la de establecer responsabilidades – incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de



índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

DÉCIMO NOVENO: Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva del inciso 3° del artículo 6° de la Constitución Política de la República y del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que de aceptarse la tesis del Fisco demandado quedarían inaplicadas. Específicamente en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, puede señalarse que el referido artículo 6° se encuentra comprendido en el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.

VIGÉSIMO: Que, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en síntesis, atendido el contexto en que se han producido los hechos fundantes de autos, cuya ocurrencia ha sido



implícitamente reconocida por el demandado, hechos ilícitos constitutivos de delitos de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

Todas razones por las cuales habrá de rechazarse la excepción de prescripción opuesta de conformidad al artículo 2332 del Código Civil y aquella en subsidio, por lo estatuido en los artículos 2314 y 2115 del mismo cuerpo normativo.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona.

Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.



VIGÉSIMO TERCERO: Que, en la especie de la prueba rendida, en especial del informe psicológico acompañado y la testifical rendida, unido a los documentos que se tuvieron agregados como medida para mejor resolver y no habiendo controvertido la demandada la ocurrencia de los hechos expuestos en el libelo, y habiéndose constatado que la demandante era pareja sentimental de Miguel Enríquez Espinosa, encontrándose ambos en el domicilio en el cual convivían el día en que este último fue asesinado en manos de agentes del Estado de Chile, y además la muerte de su hijo en común con posterioridad a causa de las heridas sufridas por la actora como consecuencias de los hechos relatados, y la aflicción y dolor de la pérdida de ambos dentro de dicho contexto, resulta evidente que toda la vida de la demandante se ha visto afectada por estos hechos que impactaron de manera directa y negativa los ejes transversales de su desarrollo vital, afectando su normal desenvolvimiento familiar y social hasta la actualidad.

Además, la existencia del daño moral en el caso de marras puede presumirse de los hechos asentados en la causa atendida la gravedad del hecho ilícito y las circunstancias en que este aconteció y sus consecuencias, con motivo del dolor y angustia con motivo de la pérdida de su pareja y su hijo en dichas circunstancias, experiencias traumáticas que sin duda produjeron diversos efectos psicológicos y que justifican la indemnización por daño moral.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en la determinación del *quantum* de la indemnización no se considerarán los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación, atendido lo razonado en los motivos precedentes; por ende, éste se evaluará prudencialmente, teniendo en consideración para ello la innecesaria, irracional y violenta ocurrencia de los sucesos relatados, los cuales obedecen al actuar de agentes del Estado de Chile, por tanto, este último es el responsable del daño padecido por la demandante, se fija la indemnización solicitada en la suma de \$50.000.000- (cincuenta millones de pesos).

VIGÉSIMO QUINTO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que el fallo quede ejecutoriado.



VIGÉSIMO SEXTO: Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo resultado el demandado totalmente vencido se le eximirá, en definitiva, del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; 144, 160, 170 del Código de Procedimiento Civil; 5° y 6° de la Constitución Política de la República; 3° de la Ley N° 18.575 y demás pertinentes, se resuelve:

I. Que se acoge la demanda de folio 1, condenándose al Fisco de Chile a pagar a doña Carmen Castillo Echeverría, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$50.000.000.- de pesos (cincuenta millones de pesos), con los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo quinto que precede.

II. Que no se condena en costas al Fisco al no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 20.692-2019

Pronunciada por doña Carolina Taeko Montecinos Fabio, Juez Titular del Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, catorce de Noviembre de dos mil veintitrés**



